



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

DICTAMEN DE COMISION

HONORABLE PLENO

Con fecha 23 de febrero de 2005, el honorable Pleno del Congreso de la República remitió para su estudio y dictamen a la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia, la iniciativa 3125, presentada por la honorable Corte Suprema de Justicia, y que dispone aprobar reformas al decreto 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa 3125 contiene un total de cincuenta y dos artículos, los cuales pretenden realizar una reforma integral del procedimiento penal. De acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa, los pilares fundamentales de las reformas son tres: la celeridad procesal, la protección a la víctima y la taxatividad de las garantías del imputado.

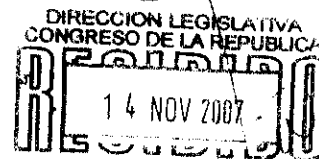
CONSIDERACIONES DE LA COMISION

La promulgación del decreto 51-92, Código Procesal Penal, es la decisión más importante en materia de política criminal que el Honorable Congreso de la República haya tomado, pues constituye la sustitución de un sistema inquisitivo, caracterizado por la escritura y formalidad en el procedimiento, la secretividad del sumario y la concentración de funciones de juzgamiento e investigación en la figura del juez; por un procedimiento de corte acusatorio, caracterizado por la publicidad, la oralidad, y principalmente por la separación de funciones de investigación y juzgamiento. Esta reforma procesal penal también fue consagrada a nivel Constitucional, en las reformas a la Constitución Política de la República en el año 1993.

Sin embargo a partir de su entrada en vigencia, el Código Procesal Penal ha sido modificado en seis ocasiones, y tal como lo afirma la misma iniciativa de ley estas modificaciones "en su mayoría constituyen un intento de incorporar mecanismos de retorno al sistema anterior", produciendo incoherencias no solo con la misma norma procesal, sino también con la Constitución Política de la República.

Dictamen Iniciativa de Ley No. 3125
Pagina 1 de 25

-000039-





*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

De igual forma se debe reconocer que a mas de diez años de la reforma procesal, la administración de justicia en Guatemala se encuentra inmersa en una situación de extrema debilidad, caracterizada por la burocratización y excesiva formalización de los procedimientos, la carencia de políticas efectivas de atención a las víctimas de los delitos, el incumplimiento injustificado de los plazos procesales, y principalmente por la ineficacia en la investigación criminal, especialmente en los delitos más graves.

Esta situación ha generado una perdida de legitimidad del sistema de justicia penal, y un clamor popular por que el Congreso de la República legisle para corregir esta situación. Es responsabilidad del honorable Congreso señalar que la mayor parte de estos problemas identificados, corresponde a la mala práctica de los operadores de justicia, o a la falta de decisión política de quienes manejan las instituciones; sin embargo, también es responsabilidad del Congreso de la República corregir aquellas deficiencias normativas, que pudieran estar coadyuvando a esta situación. Para tal efecto, la Comisión realizó una serie de consultas con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales que han desarrollado estudios sobre el funcionamiento de la justicia en nuestro país, así como consultas con las instituciones del sector justicia.

Es por ello que coherentes con la exposición de motivos de la iniciativa identificada, se pretenden incorporar con esta reforma medidas específicas para lograr la agilización de los procesos, incorporando figuras y mecanismos novedosos para lograr la celeridad y sencillez de los trámites, tales como la reforma a los artículos 12, 81, 82, 83, 84, 109, 146, 147, 148, 149, 160, 340, 343, 344, 345 Bis, 345 Ter, 345 Quáter, 346 y 350 del decreto 51-92. Es importante señalar también que en algunas regiones de nuestro país existe una cultura judicial de buenas prácticas que ha logrado simplificar en buena medida el proceso penal, por lo que estas reformas harán posible que estas buenas prácticas se transformen en ley vigente para la totalidad del país.

También en concordancia con lo expuesto por la honorable Corte Suprema de Justicia, la Comisión considera de vital importancia la necesidad de legislar a favor de la víctima de los delitos, por lo que se incorpora la reforma al artículo 117 del Código Procesal Penal, con el cual se establecen taxativamente los derechos de la víctima aún cuando no se haya constituido como querellante adhesivo, otorgándole al Ministerio Público la obligación de velar por estos derechos; así mismo se simplifica el trámite para que la víctima se constituya como querellante adhesivo mediante la reforma del artículo 340 del mismo cuerpo legal.



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

Además la Comisión incorpora reformas que buscan reforzar el sistema acusatorio, por lo que en concordancia con los artículos 203 y 251 de la Constitución Política de la República, se suprimen las facultades de investigación de los jueces, y se mejora la parte del juicio, permitiendo el contradictorio entre las partes mediante la reforma de los artículos 81, 82, 181, 225, 230, 235, 238, 318, 343, 347, 348, 351, 364, 368, 370, 378, 381 y 384.

Otras reformas propuestas por esta Comisión buscan retomar el papel de los jueces de paz, esto con el objeto de transformar la justicia de paz en una efectiva forma de solucionar los conflictos y buscar la paz social, estas son las reformas a los artículos 43, 44, 44 Bis, 44 Ter, 47, 52, 304, 324 Ter, 383, 385, 386, 387, 390 y 415 Bis y 552 Bis.

Una de las figuras más importantes que incorporó la reforma procesal lo constituye el principio de oportunidad, mediante el cual el Ministerio Público puede llevar a cabo una persecución penal más racional y efectiva, privilegiando la persecución de los delitos más graves y buscando otro tipo de solución a los conflictos de escasa trascendencia, sin embargo hasta la fecha la aplicación de este tipo de medidas continúa siendo mínima, es por ello que esta Comisión considera fundamental reformar los artículos 25, 25 Bis, 25 Ter, 25 Quáter, 25 Quinquies y el artículo 27 del decreto 51-92, de manera de facilitar la aplicación de las figuras del Criterio de oportunidad y la Suspensión condicional de la persecución penal.

Finalmente y al igual que la honorable Corte Suprema de Justicia, la Comisión considera de vital importancia la racionalización de la prisión preventiva y la efectiva judicación de la pena de prisión, por lo que también se proponen reformas a los artículos 268, 272, 493, 494 y 495.

DICTAMEN

En base a las anteriores consideraciones esta Comisión emite **DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES** a la iniciativa 3125 de reformas al decreto 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal.

**DADO EN LA SALA DE LA COMISION DE EXTRAORDINARIA DE REFORMAS
AL SECTOR JUSTICIA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, TREINTA Y UNO DE
OCTUBRE DE DOS MIL SIETE.**



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*


JUAN RAMON ALVARADO HERRERA
Presidente


CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RUBIO
Vicepresidente


JORGE MARIO BARRIOS FALLA


CONCHITA MAZARIEGOS TOBIAS


CARLOS ENRIQUE BAUTISTA GODINEZ


MANUEL ANTONIO BALDIZON


MARCO VINICIO CEREZO AREVALO


CARLOS AUGUSTO VALLE TORRES


GLADYS ANABELLA DE LEON


CARLOS ALBERTO GODOY FLORIAN


MARIO RENE CHAVEZ GARCIA


JORGE LUIS ORTEGA



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

DECRETO NÚMERO

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,

CONSIDERANDO

Que es necesario consolidar el Estado de Derecho y profundizar el proceso democrático de Guatemala y que para ello debe garantizarse la pronta y efectiva justicia penal, con la cual, además, se asegura la paz, la tranquilidad y la seguridad ciudadanas, así como el respeto a los derechos humanos; y que por otra parte, la efectiva persecución de los delincuentes y la sanción de las conductas que lesionan los bienes jurídicos, sociales e individuales de los guatemaltecos es una de las prioridades y demandas sociales más urgentes.

CONSIDERANDO

Que el decreto 51-92, Código Procesal Penal, establece un sistema de justicia caracterizado por la oralidad, la sencillez, la publicidad y la separación de funciones de investigación y juzgamiento.

CONSIDERANDO

Que a pesar de lo anterior, desde su entrada en vigencia el decreto 51-92 ha sufrido constantes modificaciones, la que en algunos casos han tergiversado la naturaleza del propio Código y representan una contradicción con los postulados constitucionales.

CONSIDERANDO

Que la administración de justicia en Guatemala se encuentra inmersa en problemas de exagerados formalismos y lentitud en la sustanciación de los procesos judiciales.

POR TANTO



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA

Las siguientes:

REFORMAS AL DECRETO 51-92, CODIGO PROCESAL PENAL

Artículo 1. Se reforma el artículo 12 del decreto 51-92, el cual queda así:

Artículo 12.- Obligatoriedad, gratuidad, publicidad, oralidad, celeridad y sencillez. La función de los tribunales en los procesos es obligatoria y gratuita. Las decisiones judiciales serán tomadas en audiencias orales y públicas. Los casos de diligencias o actuaciones reservadas serán señalados expresamente por la ley.

Artículo 2. Se reforma el artículo 25 del decreto 51-92, el cual queda así:

Art. 25.- Criterio de Oportunidad. Cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, y previo consentimiento del agraviado, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos siguientes:

- 1) Si se tratare de delitos no sancionados con pena de prisión;
- 2) En los delitos de acción pública, cuya pena máxima de prisión no fuere superior a cinco años y siempre que no exista grave violencia contra las personas.
- 3) En los delitos culposos
- 4) Que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima;
- 5) Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada;



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

La aplicación de un criterio de oportunidad para prescindir de la acción penal puede ser dispuesta en cualquier momento previo a que se ordene la apertura a juicio.

El Ministerio Público debe aplicar el criterio de oportunidad en base a razones objetivas, generales y sin discriminación. En los casos que exista agraviado el Ministerio Público deberá velar porque sea efectivamente reparado, de conformidad con lo establecido en la conciliación o mediación.

Una vez determinada la aplicación del criterio de oportunidad el Ministerio Público solicitará una audiencia unilateral con el juez que controla la investigación, a efecto de comunicarle la decisión, en dicha audiencia le presentará los hechos, su valoración jurídica, los criterios político criminales que orientaron su decisión y el acuerdo reparatorio suscrito entre las partes. El juez únicamente podrá oponerse al otorgamiento del criterio de oportunidad cuando no se llenen los requisitos legales, o cuando tenga fundados motivos para considerar que alguno de los intervinientes ha actuado bajo coacción o amenaza., en este caso el procedimiento continuará su trámite normal.

Los jueces de paz podrán conocer las solicitudes de criterio de oportunidad planteadas por el Ministerio Público o los síndicos municipales cuando la pena privativa de libertad del hecho imputado no supere los tres años de prisión. Así mismo podrán desarrollar la conciliación en estos casos.

La aplicación de un criterio de oportunidad extingue la acción pública en relación al imputado en cuyo favor se disponga.

Artículo 3. Se reforma el artículo 25 Bis. del decreto 51-92, el cual queda así:

Art. 25 Bis.- Conciliación. En los casos cuando sea conveniente aplicar un criterio de oportunidad y exista víctima determinada, el Ministerio Público promoverá la conciliación entre las partes, para el efecto el Ministerio Público podrá contar con personas especializadas en mediación. Si no se produce la conciliación, las manifestaciones de las partes deben permanecer secretas y carecen de valor probatorio.

El Ministerio Público debe desestimar la conciliación e iniciar o continuar la persecución penal cuando tenga fundados motivos para considerar que alguno de los intervinientes ha actuado bajo coacción o amenaza.



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

Si se produce la conciliación, se suscribirá un acuerdo, el que contendrá lo relativo a la reparación del daño y tendrá fuerza ejecutoria, y en el que, incluso, puedan aplicarse los usos y las costumbres de las diversas comunidades para la solución de los conflictos. El cumplimiento de lo acordado extingue la acción penal. Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, el procedimiento continúa como si no se hubiera conciliado.

Artículo 4. Se reforma el artículo 25 Ter. del decreto 51-92, el cual queda así:

ARTICULO 25 Ter.- Mediación. Las partes, sólo de común acuerdo, en los delitos condicionados a instancia particular, en los de acción privada, así como aquellos en los que proceda el criterio de oportunidad, con la aprobación del Ministerio Público podrán someter sus conflictos penales al conocimiento de centros de conciliación o mediación registrados en la Corte Suprema de Justicia, integrados por personas idóneas, nativas de la comunidad y, capaces de facilitar acuerdos y, una vez obtenidos los mismos, se trasladará un acta suscrita al Juez de Paz para su homologación, siempre que no viole la Constitución o Tratados Internacionales en Derechos Humanos, para lo cual bastará un breve decreto judicial que le dará valor de título ejecutivo al convenio suficiente para la acción civil en caso de incumplimiento de los acuerdos patrimoniales.

Artículo 5. Se suprime el artículo 25 Quáter. del decreto 51-92.

Artículo 6. Se suprime el artículo 25 Quinquies. del decreto 51-92.

Artículo 7. Se reforma el artículo 27 del decreto 51-92, el cual queda así:

Artículo 27.- Suspensión condicional de la persecución penal. En los delitos cuya pena máxima no exceda de cinco años de prisión, en los delitos culposos, y en los delitos contra el orden jurídico tributario a que se refieren los artículos 358 "A", 358 "B" y 358 "C" y 358 "D" del Código Penal, el Ministerio Público, previa comprobación del pago del valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios, que se acreditarán mediante documentación que debe expedir la autoridad tributaria; de oficio o a petición de parte, solicitará al juez la suspensión condicional de la persecución penal.

El juez puede disponer la suspensión condicional de la persecución penal cuando el imputado ha declarado su conformidad con la suspensión, haya admitido los



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

hechos que se le atribuyen y haya reparado los daños causados de conformidad con lo establecido para la conciliación y mediación.

Si no se cumplen las condiciones establecidas en este artículo, el juez rechazará la solicitud, pero la admisión de los hechos por parte del imputado carece de valor probatorio y no puede hacerse mención de esta circunstancia en ningún momento posterior.

El juez al decidir sobre la suspensión fijará el plazo de prueba, el cual no podrá ser menor de un año ni mayor de tres, y establecerá las reglas a las que queda sujeto el imputado, de entre las siguientes:

1. Residir en un lugar determinado o someterse a la vigilancia que señale el juez;
2. Abstenerse de visitar ciertos lugares o personas;
3. Abstenerse de viajar al extranjero;
4. Abstenerse del uso de bebidas alcohólicas;
5. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación o formación en indicados en la decisión;
6. Prestar trabajo de utilidad pública o interés comunitario en una institución estatal u organización sin fines de lucro, fuera de sus horarios habituales de trabajo remunerado;
7. Abstenerse del porte o tenencia de armas; y
8. Abstenerse de conducir vehículos de motor fuera del trabajo, en los casos en que el hecho que se atribuye se relacione con una violación a las reglas relativas al tránsito de vehículos.

Para fijar las reglas, se debe considerar que la misma guarde relación con el delito cometido. En ningún caso el juez puede imponer medidas más gravosas que las solicitadas por el Ministerio Público.

La decisión de suspensión del procedimiento no es apelable, salvo que el imputado considere que las reglas fijadas son inconstitucionales, resulten manifiestamente excesivas o el juez haya excedido sus facultades.



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

Si en forma considerable o injustificada el imputado se aparta de las condiciones impuestas, comete una nueva infracción o incumple con los acuerdos sobre la reparación, el juez, a solicitud del ministerio público, puede ordenar en audiencia, mediante decisión motivada, la revocación de la suspensión condicional y la reanudación del procedimiento.

El plazo de prueba se suspende mientras el imputado se encuentre privado de su libertad en razón de otro procedimiento. Cuando, sin ser privado de su libertad, el imputado está sujeto a otro procedimiento, el plazo continúa.

Artículo 8. Se reforma el numeral 1 del artículo 43, el cual queda así:

1. Los jueces de paz penal.

Artículo 9. Se reforma el artículo 44, el cual queda así:

ARTICULO 44.- Juez de Paz. Los jueces de paz tendrán las siguientes atribuciones:

a) Juzgarán las faltas, los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya pena principal sea de multa conforme el procedimiento específico del juicio por faltas que establece esta ley.

b) Conocerán a prevención en los lugares donde no hubiere Juzgado de Primera Instancia, o bien se encontrare cerrado por cuestiones de horario o por alguna otra razón.

c) Practicarán las diligencias urgentes y oirán a los detenidos dentro del plazo que manda la Constitución Política de la República.

d) También podrán judicar, en los términos que lo define el Artículo 308 de este Código, la investigación del Ministerio Público.

e) Autorizarán la aplicación del criterio de oportunidad en los casos que establezca la ley.

f) Practicarán las diligencias para las cuales fueren comisionados por los jueces de primera instancia, siempre que éstos no tuvieran su sede en la misma circunscripción municipal.



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

g) Realizarán la conciliación en los casos previstos en este Código y resolverán sobre las solicitudes de aprobación de los acuerdos alcanzados a través de la mediación.

Artículo 10. Se suprime el artículo 44 Bis.

Artículo 11. Se suprime el artículo 44 Ter.

Artículo 12. Se reforma el artículo 47, el cual queda así:

ARTICULO 47.- Jueces de Primera Instancia. Los jueces de primera instancia tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este Código establece. Instruirán, también, personalmente las diligencias que específicamente les estén señaladas. Estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio y del abreviado. Conocerán, además, del procedimiento de liquidación de costas.

Artículo 13. Se reforma el artículo 52, el cual queda así:

ARTICULO 52.- Distribución. La Corte Suprema de Justicia distribuirá la competencia territorial y reglamentará el funcionamiento, organización, administración y distribución de los Jueces de Paz, de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de Primera Instancia, Tribunales de Sentencia, Salas de la Corte de Apelaciones y Jueces de Ejecución en la forma conveniente.

Artículo 14. Se reforma el artículo 81, el cual queda así:

Artículo 81.- Derechos fundamentales. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado, con palabras sencillas y claras, el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. Le informará de los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y de las personas con quienes vive, de las cuales depende o están bajo su guarda.



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

En las declaraciones que preste durante el procedimiento preparatorio será instruido acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir, antes de comenzar la declaración sobre el hecho.

Artículo 15. Se reforma el artículo 82, el cual queda así:

Artículo 82. Desarrollo. La audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente:

1. El juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables, y descripción de los elementos de convicción existentes.
2. Si el sindicado acepta declarar el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente.
3. Después de declarar el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y defensor.
4. El juez concederá la palabra al fiscal y defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata.
5. Concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor, para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo resolver en forma inmediata.
6. El fiscal y defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación, debiendo el juez fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de diez días ni mayor de quince a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo.
7. El querellante podrá intervenir en la audiencia a continuación del fiscal.

Artículo 16. Se deroga el artículo 83.

Artículo 17. Se deroga el artículo 84.

Artículo 18. Se reforma el artículo 109, el cual queda así:

Artículo 109. Peticiones. El Ministerio Público, al igual que los demás sujetos procesales, harán todos los requerimientos en audiencia oral, unilateral o bilateral según sea el caso, debiendo ser claros y concisos, demostrando y argumentando su pretensión.



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

El requerimiento de audiencia se podrá hacer de la forma más expedita, utilizando para el efecto el teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otro medio que lo facilite. El juez o tribunal certificará lo conducente a donde corresponda cuando el fiscal, en forma injustificada, no asista a las audiencias.

Artículo 19. Se reforma el artículo 117, el cual queda así:

ARTICULO 117.- Agraviado. Este Código denomina agraviado:

- 1) A la víctima afectada por la comisión del delito.
- 2) Al cónyuge, a los padres y a los hijos de la víctima y a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito.
- 3) A los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes la dirijan, administren o controlen; y
- 4) A las asociaciones de los delitos que afecten intereses colectivos o difusos siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses.

El agraviado, aún cuando no se haya constituido como querellante adhesivo de conformidad con el presente código, tiene derecho a:

- a. Ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal.
- b. Recibir asistencia médica, psico-social, o cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo.
- c. Que se escuche su opinión en el procedimiento, fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o de las provisionales que implican clausura o extinción de la persecución penal.
- d. A ser informado conveniente y oportunamente de las decisiones fiscales y judiciales, e invitado a las audiencias en las que su opinión pueda ser vertida.
- e. Que se le concedan mecanismos efectivos para objetar las decisiones fiscales, cuando ellas representan finalizar el procedimiento penal en un período previo al juicio y a la sentencia.
- f. A recibir resarcimiento y/o reparación por los daños recibidos.



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

- g. A recibir protección cuando su integridad física corra peligro como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado.
- h. A que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal.

El Ministerio Público, estará obligado a garantizar estos derechos por medio de sus órganos correspondientes, pudiendo para el efecto realizar convenios con instituciones públicas o privadas.

Artículo 20. Se reforma el artículo 146 el cual queda así:

Artículo 146. Registro. Las audiencias orales, unilaterales o bilaterales, podrán ser grabadas en formato de audio y/o video, o cualquier otra forma de registro que garantice su fidelidad. Los asistentes administrativos serán los encargados de archivar adecuadamente las grabaciones, y entregarán copia digital de la misma a los intervinientes, sea física o virtualmente.

En toda disposición de este código que se indique acta, debe entenderse que se refiere a las grabaciones de audio y/o video.

Artículo 21. Se deroga el artículo 147.

Artículo 22. Se deroga el artículo 148.

Artículo 23. Se deroga el artículo 149.

Artículo 24. Se reforma el artículo 160, el cual queda así:

Artículo 160-. Comunicación. Toda decisión jurisdiccional se tendrá por comunicada en el momento de la audiencia oral en que se emita, sin necesidad de acto posterior alguno.

La convocatoria a audiencias se podrá realizar de la forma más expedita, sea por teléfono, fax, correo electrónico u otra forma que facilite y asegure la realización de la audiencia.

Artículo 25. Se reforma el artículo 181, el cual queda así:



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

Artículo. 181.- Objetividad. Salvo que la ley disponga lo contrario, el Ministerio Público tiene el deber de procurar, por si o por los agentes policiales que designe, la averiguación de la verdad, mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este Código.

Durante el juicio, la iniciativa probatoria para procurar la averiguación de la verdad, corresponde a las partes procesales.

Artículo 26. Se reforma el artículo 225, el cual queda así:

ARTÍCULO 225.- Procedencia. El Ministerio Público podrá ordenar peritación de oficio o a pedido de parte, cuando para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. Los juzgados y tribunales respectivos podrán ordenarlos únicamente a petición de parte.

No rigen las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, sin haber sido requerido por la autoridad competente, aunque para informar utilice las aptitudes especiales que posea. En este caso, rigen las reglas de la prueba testimonial.

Artículo 27. Se reforma el artículo 230, el cual queda así:

ARTÍCULO 230.- Orden de peritaje. El tribunal de sentencia, el Ministerio Público, o el juez que controla la investigación en el caso de prueba anticipada, determinará el número de peritos que deben intervenir y los designará según la importancia del caso y la complejidad de las cuestiones a plantear, atendiendo a las sugerencias de las partes.

A petición del interesado, se fijará con precisión los temas de la peritación y acordará con los peritos designados el lugar y el plazo dentro del cual presentarán los dictámenes.

Las partes pueden proponer también sus consultores técnicos, en número no superior al de los peritos designados.

Artículo 28. Se reforma el artículo 235, el cual queda así:

ARTÍCULO 235.- Nuevo dictamen; ampliación. Cuando se estimare insuficiente el dictamen, el Ministerio Público de oficio o a petición de parte podrá ordenar la



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

ampliación o renovación de la peritación, por los mismos peritos o por otros distintos.

Artículo 29. Se reforma el artículo 238, el cual queda así:

ARTICULO 238.- Autopsia. En caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, el Ministerio Público ordenará la práctica de la autopsia aunque por simple inspección exterior del cadáver la causa aparezca evidente. No obstante, el fiscal respectivo bajo su responsabilidad, podrá solicitar al juez que ordene la inhumación sin autopsia, en casos extraordinarios, cuando aparezca de una manera manifiesta e inequívoca la causa de muerte.

Artículo 30. Se reforma el artículo 264, el cual queda así:

ARTICULO 264.- Sustitución. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonable evitando por aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente, de oficio, podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes:

- 1) El arresto domiciliario, en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga.
- 2) La obligación de someterse a cuidado o vigilancia de una persona o de institución determinada, quien informará periódicamente al tribunal.
- 3) La obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe.
- 4) La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal.
- 5) La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares.
- 6) La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa.
- 7) La prestación de una caución adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas.

El tribunal ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. En ningún caso se utilizará estas medidas desnaturalizando su finalidad o se impondrá medidas cuyo cumplimiento fuere imposible. En especial, se evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de los medios del imputado impida la prestación.



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

En casos especiales, se pondrá también prescindir de toda medida de coerción, cuando la simple promesa del imputado del procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga o de obstaculización para averiguación de la verdad.

No podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales, o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de doce años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, y robo agravado cuando exista grave violencia contra las personas.

También quedan excluidos de medidas sustitutivas los delitos comprendidos en el Capítulo VII del Decreto No. 48-92 del Congreso de la República. Ley contra la Narcoactividad, a excepción del proceso instruido por el delito de posesión para el consumo

Las medidas sustitutivas acordadas deberán guardar relación con la gravedad del delito imputado. En caso de los delitos contra el patrimonio, la aplicación del inciso séptimo de este artículo deberá guardar una relación proporcional con el daño causado.

En los procesos instruidos por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera y contrabando aduanero, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas a las que se refiere este artículo, excepto la de prestación de caución económica, siempre y cuando la misma no sea inferior al cien por ciento (100%) de los tributos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios, que a petición del juez determine la administración tributaria.

Artículo 31. Se reforma el artículo 268, el cual queda así:

ARTICULO 268.- Cesación del Encarcelamiento. La privación de la libertad finalizará:

- 1) Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o torne conveniente su sustitución por otra medida.
- 2) Cuando su duración supere o equivalga a la condena que se espera, considerando, incluso, la posible aplicación de las reglas penales relativas a la suspensión o remisión de la pena, o a la libertad anticipada.
- 3) Cuando su duración exceda de un año; pero si se hubiere dictado sentencia condenatoria pendiente de recurso, podrá durar tres meses más.



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

A requerimiento del Ministerio Público o del querellante adhesivo y previa audiencia a los interesados, el plazo previsto para la prisión preventiva podrá ser prorrogado por el juez o tribunal que conozca el proceso hasta por seis meses más.

Vencida esta prórroga, no se podrá acordar una nueva ampliación, salvo que a solicitud del Ministerio Público o del querellante adhesivo, y previa audiencia a los interesados, la Sala de Apelaciones o la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia disponga una prórroga de la prisión preventiva hasta por tres meses más. De igual forma se actuará cuando se disponga el reenvío o se conozca el caso en casación.

En las resoluciones de prórroga de la prisión preventiva, los jueces y magistrados estarán obligados a indicar los motivos concretos que motivaron los retrasos en el procedimiento y las justificaciones de la ampliación.

Vencido el plazo de la prisión preventiva, el órgano jurisdiccional que conozca el caso ordenará de oficio o a solicitud de parte interesada, la libertad del procesado, imponiendo, si fuera necesario, la aplicación de una medida sustitutiva.

Artículo 32. Se reforma el artículo 272, el cual queda así:

Artículo 272.- Falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de procesamiento, el juez o tribunal declarará la falta de mérito y ordenará la libertad inmediata de sindicado.

Artículo 33. Se reforma el artículo 304, el cual queda así:

Artículo 304.- Prevención policial. Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible perseguible de oficio, informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar, para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos.

Artículo 34. Se suprime el segundo párrafo del artículo 368.

Artículo 35. Se deroga el artículo 324 Ter.

Artículo 36. Se deroga el artículo 335.



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

Artículo 37. Se reforma el artículo 340, el cual queda así:

Artículo 340. Audiencia. La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal.

En caso de formularse acusación se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate.

El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público.

En caso de solicitarse la Clausura Provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que deba realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento como lo establece el artículo 82 de este código.

En los demás requerimientos se considerará sobre la idoneidad de los mismos.

Artículo 38. Se crea el artículo 343, el cual queda así:

Artículo 343. Ofrecimiento de Prueba. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación; para el efecto se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada una, con indicación del nombre del testigo o perito, documento de identidad, residencia o lugar de trabajo y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente, indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretende probar.

Ofrecida la prueba se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto.

De igual forma se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez respectivo resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal.

Artículo 39. Se reforma el artículo 344, el cual queda así:



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

Artículo 344.- Citación a juicio. Al dictar el auto que admita o rechace la prueba, el juez citará a los sujetos procesales, para que, en el plazo común de cinco días comparezcan a juicio al tribunal designado y constituyan lugar para recibir notificaciones. Si el juicio se realizare en un lugar distinto al del procedimiento intermedio el plazo de citación se prolongará cinco días más.

Artículo 40. Se deroga el Capítulo III del Título II del decreto 51-92

Artículo 41. Se deroga el artículo 345 Bis.

Artículo 42. Se deroga el artículo 345 Ter.

Artículo 43. Se deroga el artículo 345 Quáter.

Artículo 44. Se reforma el artículo 346, el cual queda así:

Artículo 346.- La unidad administrativa del tribunal fijará el día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de 5 días ni mayor de 10 días.

Dentro de los 5 días de fijada la audiencia de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces del tribunal. Si alguno de los jueces considera que incurre en motivo de excusa lo invocará en el mismo plazo, para el efecto se convocará a audiencia a todos los intervinientes.

Artículo 45. Se deroga el artículo 347.

Artículo 46. Se deroga el artículo 348.

Artículo 47. Se deroga el artículo 350.

Artículo 48. Se deroga el artículo 351.

Artículo 49. Se deroga el artículo 352

Artículo 50. Se reforma el artículo 353, el cual queda así:

Artículo 353. Cesura del juicio. La audiencia de juicio se dividirá en dos fases. La primera para discutir sobre la responsabilidad penal del acusado y la segunda para individualizar la pena.



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

Al momento de relatar la sentencia, se comunicará la hora exacta del día siguiente en que continuará la audiencia de juicio para la fase de individualización de la pena.

En caso de ser sentencia absolutoria, se tendrá por cerrada la audiencia y por notificada la decisión en el relato de la sentencia.

Artículo 51. Se reforma el artículo 364, el cual queda así:

Artículo 364.- Lecturas de actas y documentos. El tribunal podrá ordenar, a solicitud de alguno de los sujetos procesales, la lectura:

1. De los dictámenes periciales, siempre que se hayan cumplido conforme a las reglas de los actos definitivos e irreproducibles o de instrucción suplementaria, quedando a salvo la facultad de las partes para exigir la declaración del perito en el debate.
2. De las declaraciones de los testigos que hayan fallecido, estén ausentes del país, se ignore su residencia o que por obstáculo insuperable no puedan declarar en el debate, siempre que esas declaraciones se hayan recibido conforme a las reglas de los actos definitivos e irreproducibles.
3. La denuncia, la prueba documental o de informes, los careos y las actas de inspección, registró domiciliario, requisas personal, y reconocimientos a que el testigo aludiere en su declaración durante el debate.
4. Las declaraciones de imputados rebeldes o condenados como partícipes del hecho punible objeto del debate.

Artículo 52. Se reforma el artículo 368, el cual queda así:

Artículo 368.- Apertura. En el día y hora fijados, el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia de los sujetos procesales, testigos, peritos o interpretes que deben tomar parte del debate.

El presidente del tribunal declarará abierto el debate y concederá la palabra a la parte acusadora y posteriormente a la defensa para que hagan sus alegatos de apertura.

Artículo 53. Se reforma el artículo 370, el cual queda así:

ARTÍCULO 370.- Declaraciones del acusado. Después de la apertura del debate o de resueltas las cuestiones incidentales, el presidente le explicará al acusado con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye, y le advertirá que



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

puede abstenerse de declarar y que el debate continuara aunque no declare. Permitirá, en principio, que manifieste libremente cuanto tenga por conveniente sobre la acusación. Podrán interrogarlo el Ministerio Público, el querellante, el defensor y las partes civiles en ese orden.

Artículo 54. Se reforma el artículo 378, el cual queda así:

ARTÍCULO 378.- Interrogatorio. Presente el testigo o perito el presidente le concederá la palabra a la parte que lo propuso para que proceda a interrogarlo.

Al finalizar el interrogatorio el presidente concederá la palabra a las demás partes que deseen realizar el contrainterrogatorio.

El presidente moderará el interrogatorio y no permitirá que el testigo o perito conteste a preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. Así mismo moderará el contrainterrogatorio y no permitirá que conteste preguntas impertinentes. Las resoluciones que sobre ese extremo adopte serán objetables, decidiendo inmediatamente el tribunal.

Artículo 55. Se reforma el artículo 381, el cual queda así:

ARTICULO 381.- Nuevas pruebas. El tribunal podrá ordenar, a petición de alguno de los sujetos procesales la recepción de nuevos medios de prueba, si en el transcurso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad, y siempre que surjan de la producción de la prueba en el debate. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por un plazo no mayor de cinco días.

También podrá citar a los peritos para aclaraciones sobre sus dictámenes.

Artículo 56. Se deroga el último párrafo del artículo 383.

Artículo 57. Se deroga el artículo 384.

Artículo 58. Se deroga el último párrafo del artículo 386.

Artículo 59. Se deroga el último párrafo del artículo 387.

Artículo 60. Se deroga el último párrafo del artículo 390.



-000061-

Dictamen Iniciativa de Ley No. 3125
Pagina 23 de 25

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

Artículo 61. Se deroga el artículo 415 Bis.

Artículo 62. Se modifica el artículo 421, el cual queda así

Artículo 421.- Efectos. El tribunal de apelación especial concederá solamente de los puntos de la sentencia impugnada expresamente en el recurso.

En caso de proceder el recurso por motivos de fondo, anulará la sentencia recurrida y pronunciará la que corresponda.

Si se trata de motivos de forma, anulará la sentencia y el acto procesal impugnado y enviará el expediente al tribunal respectivo para que lo corrija. Seguidamente, el tribunal de sentencia volverá a dictar el fallo correspondiente.

Cuando el error contenido en la sentencia radique en la motivación de la decisión o valoración de la prueba, el tribunal que la haya dictado corregirá el defecto sin renovar la audiencia de debate.

Artículo 63. Se modifica el artículo 433, el cual queda así

Artículo 433.- Defectos no esenciales. Los errores de derecho en la fundamentación de una resolución recurrida, que no influyan en su parte resolutive, deberán ser corregidos aunque no provoquen su anulación. De la misma manera serán corregidos los errores materiales en la designación o en el cómputo de las penas o de las medidas de seguridad y corrección.

Salvo en los casos de falta de fundamentación o errónea valoración de la prueba que señala el artículo 421 de este código, en donde los mismos jueces dictarán el nuevo fallo.

Artículo 64. Se reforma el artículo 493, el cual queda así:

Artículo 493.- Ejecutoriedad. Las condenas penales no serán ejecutadas antes de que se encuentren firmes. A tal efecto, el órgano jurisdiccional correspondiente, dentro de los tres días siguientes, enviará al juez de ejecución, certificación de la sentencia firme para los efectos del cómputo definitivo de la pena impuesta.

El juez de ejecución determinará el cómputo definitivo de las penas impuestas, dentro de un plazo de 30 días de haber recibido la certificación de la sentencia, con el abono de la prisión preventiva y la detención que hubiese cumplido el condenado, para dichos efectos requerirá toda la información que sea necesaria a las autoridades judiciales y administrativas respectivas.



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

Si el condenado estuviere en libertad, ordenará inmediatamente su detención y una vez aprehendido procederá conforme a esta regla.

Ordenará también las medidas necesarias para cumplir con los efectos accesorios de la sentencia; comunicaciones, inscripciones, decomiso, destrucción y devolución de cosas y documentos.

Artículo 65. Se reforma el artículo 494, el cual queda así:

Artículo 494.- Computo definitivo. El juez de ejecución notificara dentro del plazo de tres días de haber determinado el computo de la o las penas impuestas, al condenado, su defensor, Ministerio Público y al Director del Centro Penitenciario donde deberá cumplirla, determinando con exactitud la fecha en que finaliza la condena y, en su caso, la fecha a partir de la cual el condenado podrá requerir sus beneficios penitenciarios.

Las partes a quienes se les haya notificado el cómputo de la pena, podrán plantear objeciones dentro de plazo de tres días de haber sido notificados. El juez de ejecución señalará audiencia oral dentro de los cinco días siguientes de recibidas las objeciones, debiendo resolver en definitiva en dicha audiencia.

El cómputo es siempre reformable, aun de oficio, cuando se compruebe un error o nuevas circunstancias lo tornen necesario.

Artículo 66. Se reforma el artículo 495, el cual queda así:

Artículo 495.- Incidentes. El Ministerio Público, el condenado y su defensor podrán plantear incidentes relativos a la ejecución, libertad anticipada, extinción de la pena y beneficios penitenciarios. El juez de ejecución los resolverá en audiencia oral, previa notificación a las partes respectivas, para el efecto, las partes podrán proponer y el juez citar a los testigos, peritos o recibir cualquier otro medio probatorio pertinente que deba rendirse durante la audiencia.

Artículo 67. Se reforma el artículo 552 Bis. el cual queda así:

Artículo 552 Bis.- Juzgados de paz comunitarios. Los jueces de paz comunitarios son personas de reconocida honorabilidad y arraigo que puedan comunicarse en la lengua predominante de la región y en español. Para la



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

designación de los jueces comunitarios, la Corte Suprema de Justicia realizará consultas con las diferentes autoridades comunitarias.

Los jueces de paz comunitarios tendrán competencia para:

- a) Aplicar el criterio de oportunidad, en los casos y formas en que autoriza el artículo 25 de este Código.
- b) Celebrar audiencias de conciliación y aprobar acuerdos entre las partes en los casos de delitos de acción privada y de acción pública dependientes de instancia particular.
- c) Cuando se trate de delitos graves o cuando no proceda el criterio de oportunidad o fracase la conciliación. Podrán recibir la primera declaración del imputado, dictar las medidas de coerción personal que correspondan y remitir el expediente al juzgado de primera instancia competente, poniendo a su disposición al detenido, si lo hubiere,

Dichos jueces resolverán por mayoría, previa deliberación y ejercerán su competencia en la circunscripción territorial del Municipio. Presidirá el tribunal el juez de mayor edad y resolverán con arreglo a los usos y costumbres, la equidad y los principios generales del Derecho cuando ello fuere posible. Sus fallos no podrán violar la Constitución ni las leyes.

La actividad judicial que desarrollen se efectuará conforme a los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción que inspiran el sistema acusatorio.

Artículo 68. El presente decreto entrará en vigencia a los ocho días de su publicación en el diario oficial.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL xxx DE DOS MIL SIETE.